

ENTREVISTA AL MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN



Celestino Corbacho, responsable de Trabajo e Inmigración, ayer en su despacho, durante un momento de la entrevista. /Rafa Martín

“Es necesario prorrogar la renta de 420 euros a parados”

LA CRISIS NO DA TREGUA/ El titular de Trabajo admite que persisten las “dificultades” económicas, por lo que defiende la necesidad de perpetuar el ‘cheque parado’.

M. Tejo/M.Valverde. Madrid
Al ministro de Trabajo e Inmigración le persigue una “insatisfacción perpetua”: la de “no poder frenar el huracán del desempleo a pesar del mucho esfuerzo y trabajo”. Cuando Corbacho se hizo cargo de su cartera, en abril de 2008, había 2,3 millones de parados y desde entonces la voracidad de la crisis ha elevado la cifra hasta los 4,6 millones. Debido a la situación de precariedad que viven miles de familias, el ministro propondrá este verano “continuar el programa de temporal de protección e inserción al desempleo” (Prodi), coloquialmente conocido como *cheque parado*.

El ministro explicó en una entrevista con EXPANSIÓN que este subsidio –del que ya se han beneficiado más de medio millón desde 2009– “ha tenido unos efectos muy positivos, porque ha actuado como una red de protección”. De hecho, el ministro admite que para muchos ciudadanos han sido la única fuente de ingresos en seis meses.

El ministro confía en que en junio baje el paro, al tratarse históricamente de un buen mes

“Siempre hemos dicho que el Prodi [*cheque parado*] no nacía como una extensión de subsidio, sino como la necesidad de habilitar una política de protección ante un contexto extraordinario y de dificultad. Ese contexto continúa estando, aún no hay signos de carácter positivo, así que la necesidad, la conveniencia y interés de la medida sigue existiendo”, argumenta Corbacho, tras apuntar que “cuando llegue el mes de agosto propondré su continuidad”.

Entre otras cosas, “porque ha beneficiado a muchos jóvenes”. Y es que aunque en

principio se pensó que los parados de mayor edad coparían los subsidios, las cifras que maneja el ministro reflejan que en torno a un 30% de los beneficiarios son menores de 25 años.

Eso sí, esta nueva prórroga dejará peso en el Presupuesto del próximo año. Cabe recordar que, hasta ahora, el programa de subsidios ha absorbido 1.300 millones de euros, una cifra similar al ahorro que espera arañar Moncloa con la congelación de las pensiones no contributivas (1.400 millones).

Por cierto, tras este esquiolo a su Departamento, Corba-

cho advierte de que “en Trabajo y Seguridad Social no se puede recortar más”. “Salvo al ministro”, ironiza.

¿Y qué pasará con el gasto del Inem? Corbacho se muestra optimista. El antiguo Inem dedicará en subsidios una cifra similar a la de este año, en torno a 35.000 millones de euros. “No se prevé un descenso potente, pero la factura debería ir descendiendo”, remacha.

En el corto plazo, espera algún brote verde. “El comportamiento del empleo está yendo relativamente bien”, apunta, mientras avanza que en junio se cumplirá aquella regla no escrita de que “los meses de junio no son meses malos para el paro”.

Tras la reforma laboral toca ahora la de las pensiones, un tema polémico que forzó al Ejecutivo a rebajar su inicial propuesta. Pasadas las aguas revueltas, Corbacho vuelve a ferrarse ahora al borrador enviado a Bruselas, que contempla una edad de jubilación a los 67 años, eso sí, “sin un plazo determinado”.

Zapatero reconoce que la reforma no es la solución definitiva

TILDA DE “PROGRESISTA” SU ACTUACIÓN

Rubén Folgado. Madrid

Treinta segundos de aplausos y vítores; así mostró la bancada socialista su apoyo al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras defender ante el Congreso una reforma laboral “que no es la solución definitiva al paro”. A pesar de ello, Zapatero aseguró que el nuevo modelo (convalidado por la Cámara Baja gracias a la abstención de PP y CiU) se trata de “una pieza más” que favorecerá “la nueva estructura productiva de España”.

La guerra dialéctica entre el líder socialista y el resto de fuerzas fue la tónica de la sesión parlamentaria vivida ayer. Zapatero no escatimó en reproches al resto de partidos por sus “prejuicios”. Aunque las acusaciones más importantes fueron a parar a la bancada popular. El líder el PP, Mariano Rajoy, exigió a Zapatero que retirara hasta cinco de las medidas que impulsará en las próximas semanas, entre las que destacan la subida del IVA, la congelación de pensiones o la inclusión de la posibilidad de regular la negociación colectiva dentro de la nueva reforma laboral.

Zapatero acusó en esta ocasión a Rajoy de “no mojar-se” e incluso le tildó de “incapaz” de dar alternativas. Además, acusó al diputado de IU, Gaspar Llamazares, de “meter el dedo en el ojo”. Tras pedirle que espere a ver los resultados de la nueva normativa laboral, Zapatero incluso llegó a preguntarle si el mejor modelo “se encuentra en China o Rusia”.

El presidente del Gobierno afirmó en varias ocasiones que sus medidas son propias de un “progresista”. En este sentido concluyó que “un progresista está obligado a impulsar reformas en un mercado laboral que tiene un 30% de temporalidad y un 20% de paro”.

Precisamente, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó hace tan sólo dos días que el Gobierno no sería capaz de reducir el paro si emprendía un castigo contra la temporalidad. Aunque Zapatero remachó ayer en su ponencia ante el Pleno del Congreso que la nueva reforma busca “la flexiseguridad”, o lo que es lo mismo, flexibilidad dentro de las empresas para dinamizar la contratación al tiempo que aumenta la seguridad para el trabajador. Una seguridad, que según el presidente, queda apuntalada gracias a la adopción del modelo austriaco, que se adoptará en los próximos meses.

LA CLAVE

El presidente aseguró ante el Pleno del Congreso, que **“una persona progresista está obligada a realizar reformas”** dentro de un mercado donde **la temporalidad alcanza el 30% y la tasa de paro se sitúa en el 20%** de la población activa.

CCOO recurrirá la norma ante el TC

No sólo habrá una huelga general el próximo 29 de septiembre por la aprobación vía decreto de la nueva normativa laboral. CCOO anunció ayer que sus servicios jurídicos consideran “inconstitucionales” varios puntos de la reforma convalidada en solitario por el PSOE en el Congreso. De esta manera, la organización sindical afirmó ayer que entre las novedades que vulneran la Constitución se encuentra el hecho de que las Empresas de Trabajo Temporal vayan a poder “decidir sobre el empleo público”. Asimismo, CCOO tacha también de inconstitucional el hecho de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) vaya a abonar 8 días de indemnización por despido, ya que, a juicio de la organización dirigida por Ignacio Fernández Toxo, “serán los propios trabajadores quienes costeen parte del despido de sus compañeros”. El tercer punto que podría chocar con la Carta Magna es la reducción de las jornadas laborales, y por tanto de los salarios, en función de causas de productividad o de dificultades económicas. Además, CCOO cree que el hecho de que los empresarios puedan modificar las condiciones laborales “por encima de la propia negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, viola el derecho de la libertad sindical” recogido en la Constitución Española.

Todos quieren un “paréntesis”

“Tenemos un paréntesis, una coyuntura que nos obliga a tomar medidas duras”. El ministro de Trabajo explica desde la excepcionalidad de la crisis que el Gobierno socialista esté pidiendo “sacrificios” a los ciudadanos, particularmente a los pensionistas. Curiosamente es el mismo recurso del que echó mano la patronal para justificar en su día que el *maná* del Estado debía llegar también al tejido empresarial, alegando que era necesario “un paréntesis en el capitalismo”. Pese a que Celestino Corbacho defiende a capa y espada las medidas anticrisis adoptadas por el Ejecutivo, se compromete a resarcir a los damnificados “pasada esta coyuntura”: “No renunciaremos nunca al desarrollo continuo del Estado del Bienestar”, dice. Su objetivo pasa por que una vez que el déficit público se recorte hasta el 3%, allá por 2013, los pensionistas “ganen espacio al IPC”, una fórmula que el responsable de Seguridad Social ha desaconsejado públicamente.

Expansión Pro
en ORBYT.

Consulte la entrevista completa con el ministro.

Pruebalo GRATIS durante un mes